

Imprimir

Desde su llegada al Gobierno como presidente de Colombia, Gustavo Petro ha tenido en mente un gran acuerdo nacional. Así lo planteó tanto el 7 de agosto de 2022, el día de su posesión, como en su discurso del 20 de julio en el que convocó a todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana para forjar un acuerdo en el que se llegue a puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas, de modo que el país avance por la senda de la reconciliación. Sin embargo, y después de unas semanas de relativo optimismo fundado en una coalición de mayorías en el Congreso que fue rota por el presidente, la meta parece lejana, a pesar de que la propuesta sigue en pie y que el Gobierno avanza en ella.

En medio de un ambiente tenso, polarizante, caracterizado por los enfrentamientos del presidente con la Fiscalía, la Procuradora General, los gremios, los medios de comunicación y hasta con la Corte Suprema, las reformas del Gobierno no avanzan en el Congreso, a pesar de que el mismo anunciara el 20 de julio una robusta agenda legislativa. Luego de que en la legislatura pasada se hundieran las reformas al sistema laboral y al Código Penitenciario, así como el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, el Gobierno solamente ha radicado un nuevo texto de reforma laboral, mientras liberales y conservadores alistan propuestas de reforma a la salud y al sistema de trabajo.

En el país prima el sentimiento de que se necesitan reformas profundas para avanzar, pero, al parecer, no están dadas las condiciones necesarias para despejar el camino a un proyecto que supere las expectativas de las mayorías.

En su intento por lograr la paz total, el Gobierno ha vinculado el acuerdo nacional a un proyecto de ley de reconciliación nacional referido de manera particular a los narcotraficantes, dando pie a crecientes críticas provenientes de sectores que se quejan de no ser escuchados. A esta iniciativa que ha agregado un ingrediente más al cuestionamiento de los proyectos del Gobierno se suman las críticas a su manejo de las relaciones con las fuerzas vivas de la nación.

Ya es trivial referirse a la falta de interlocución en el interior del Gobierno. Muchas son las anécdotas que se mencionan acerca de la falta de conocimiento de los ministros y altos

funcionarios de los planes del alto mandatario. Más grave aún la ausencia de una relación continua con los partidos políticos y sus representantes en el Congreso los cuales no son invitados formalmente sino mediante invitaciones a grupos pequeños o individualmente a la oficina de enlace del Ministerio del Interior.

El Gobierno sostiene que sus proyectos se fundamentan en diálogos que mantiene con la sociedad en actos que organiza con participación popular y en mesas de trabajo en los que escuchan voces de distintos sectores; también afirma que seguirá presentando sus proyectos en el Congreso para que sean objetos de debate, pero esta dinámica no sustituye al Congreso como espacio de discusión política y de construcción de consensos, lo que da lugar a que la lucha por el poder se vuelva más virulenta y desgastante adobada con expresiones estigmatizantes.

La idea de un acuerdo nacional para construir un país en paz no es una novedad en Colombia. De hecho, se logró para poner fin a la Guerra de los Mil Días, en 1930 cuando el liberalismo volvió al poder; después del asesinato de Gaitán en 1948; en 1957 para abrir paso al Frente Nacional y en 1990 para dar nacimiento a la Constitución de 1991. En todos esos casos primó el sentimiento de que, en ausencia de un gran acuerdo, todos estaban expuestos a la ruina. En otros términos, estaban dadas condiciones objetivas y subjetivas. Este no parece ser el caso hoy, por lo que habría que crearlas aclarando en qué consistiría el acuerdo, sus objetivos, sus prioridades, sus recursos.

En las condiciones actuales, casi todos los actores políticos y sociales están obnubilados por un juego de suma cero. Se cree que lo que el otro gana es a expensas del interés propio y la proximidad de las elecciones contribuye a nutrir este sentimiento de confrontación en un ambiente de rivalidad poco amistoso. Los asesinatos de líderes sociales no cesan; los poderes de facto retan al Gobierno y descalifican al presidente mientras algunos sectores no ocultan el odio que sienten hacia él.

Es probable que después de octubre, una vez que se conozca el nuevo mapa político del país, surjan circunstancias propicias para acciones concertadas que despejen la vía de un acuerdo

nacional que augure una paz total animada por una ciudadanía republicana actuante y tolerante. Muchos sectores sociales, y en particular los empresarios, siguen siendo partidarios de un diálogo franco para que las reformas sean concertadas. Falta dar un paso decisivo sustentado en la confianza mutua y el compromiso con lo acordado.

Rubén Sánchez David

Foto tomada de: El Tiempo